

Diálogo de sordos sobre Chiapas

BERTRAND DE LA GRANGE Y MAITE RICO

Periodistas y corresponsales en México y Centroamérica de los diarios *Le Monde* y *El País*, respectivamente
Autores del libro *Marcos, la genial impostura*,

Lo primero que hizo el subcomandante Marcos al volver a su feudo de Chiapas, el 5 de abril pasado, después de la gran marcha pacífica que él mismo había encabezado hasta la Ciudad de México, fue retomar las armas y exhibirlas frente a los simpatizantes indígenas del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN).

Con su rifle de asalto AR-15, su pistola calibre 38, sus cananas, su aparato de radiocomunicación, su uniforme desgastado y el pasamontañas negro que lo ha hecho famoso internacionalmente, el ex profesor de diseño gráfico anunció que “más tarde que temprano” se reanudaría el diálogo con el Gobierno mexicano para alcanzar “una paz con justicia y dignidad”. Nada, ni en el tono ni en la forma, parecía indicar un verdadero deseo de poner fin a un conflicto de más de siete años, sino todo lo contrario. Unos días antes, varias personalidades extranjeras, invitadas por el subcomandante, habían asistido a su entrada triunfal en la capital mexicana. Embargados por la emoción, algunos de sus padrinos no habían tenido empacho en compararlo con Gandhi y Martin Luther King. El sociólogo Alain Touraine, el lingüista Noam Chomsky, el eurodiputado Sami Nair, los escritores José Saramago y Manuel Vázquez Montalbán, la “pacifista” Hebe de Bonafini, simpatizante declarada de ETA, la ex primera dama de Francia Danielle Mitterrand y otros admiradores de menor renombre estaban ya de vuelta en sus países respectivos cuando Marcos hizo alarde, una vez más, de su talante militarista. Claro que, probablemente, todos ellos le habrían encontrado una justificación, como cuando en el pasado aseguraban que el jefe zapatista no podía dejar las armas mientras el Ejército “amenazara” a las comunidades indígenas de Chiapas.

Hoy las condiciones han cambiado. La derrota electoral del Partido Revolucionario Institucional (PRI), que estuvo en el poder sin interrupción desde 1929 hasta el 2 de julio del año pasado, precipitó un proceso de transición que había arrancado en los años ochenta. De forma irresponsable, algunos intelectuales europeos parecen despreciar el despertar democrático de los mexicanos y siguen fascinados por los dis-

cursos revolucionarios de los autoproclamados hombres providenciales, que tanto daño han hecho al continente latinoamericano.

Por eso no quieren ver que el nuevo presidente de la República, el conservador Vicente Fox, ha dado un giro espectacular al conflicto chiapaneco, al cumplir con las tres condiciones exigidas por el EZLN para reanudar unas negociaciones interrumpidas en 1996: liberación de un centenar de presos zapatistas (incluidos algunos condenados por delitos de asesinato y violación), evacuación de siete posiciones militares y adopción por el Congreso de una ley indígena.

Muchos partidarios de Fox han puesto el grito en el cielo y lo acusan de haber revivido un movimiento moribundo. La apuesta del presidente consistía en quitarle a Marcos todo pretexto para no reiniciar el diálogo. Sin duda, Fox contribuyó a hacer de la marcha zapatista un éxito, al convertirse en su principal promotor. Para evitar cualquier incidente, la caravana del EZLN fue escoltada por la policía motorizada y por varios helicópteros durante los dieciséis días (del 25 de febrero al 9 de marzo) que duró el recorrido: tres mil kilómetros entre San Cristóbal de Las Casas (Chiapas) y la Ciudad de México, que incluyeron varios rodeos para visitar algunos Estados fuera de la ruta. Las condiciones del trayecto eran, desde luego, muy distintas a las que el subcomandante había imaginado cuando, el 1 de enero de 1994, ordenó a sus "tropas" que marcharan rumbo al centro del país y tomaran la capital por las armas para imponer las "leyes revolucionarias", publicadas el mismo día en que el EZLN ocupó militarmente cinco cabeceras municipales en Chiapas. Marcos quería repetir entonces la hazaña de Emiliano Zapata, cuando irrumpió en las calles de Ciudad de México en 1914, pero terminó haciendo, bajo protección policial, una gira de promoción personal con poco contenido político, aunque mucho más cómoda.

Pese al disgusto de muchos parlamentarios, los zapatistas hablaron en la Cámara de Diputados y lo hicieron con el rostro cubierto por el pasamontañas. Ahí exigieron al Congreso que adoptara sin modificaciones el proyecto de ley indígena redactado por los legisladores de la Comisión de Concordia y Pacificación (COCOPA) a partir de los Acuerdos de San Andrés, firmados en 1996 por los representantes del EZLN y del Gobierno priísta de Ernesto Zedillo.

Los senadores rechazaron este ultimátum, pero consultaron con los asesores del EZLN para la elaboración de un texto que eliminaba los gazapos jurídicos y los contenidos que reñían abiertamente con los principios constitucionales. El 25 de abril de 2001, el Senado aprobó por unanimidad las modificaciones a la Constitución incluidas en el dictamen. Esta votación desató inmediatamente una polémica en los sectores pro zapatistas del Partido de la Revolución Democrática (PRD) y del Partido del Trabajo (PT), las dos formaciones de izquierda representadas en el Congreso.

Preocupado por las reacciones adversas de algunos de sus simpatizantes, el PRD decidió votar en contra del proyecto de ley en la Cámara de Diputados. La dirección del partido aseguró que el voto favorable de sus representantes en el Senado había sido

un “error táctico” pero, al mismo tiempo, hizo saber que no aceptaría más descalificaciones de parte de Marcos y que su solidaridad iba con los diez millones de indígenas de 57 etnias (10% de la población del país), y no con una organización en particular. En el fondo, el PRD y las otras fuerzas políticas se resisten a caer en la trampa del discurso indigenista, que se olvida de los casi 40 millones de pobres no indígenas. La pobreza en México no es un problema étnico, sino un desafío social y económico.

El historiador Juan Pedro Víqueira, uno de los pocos expertos sin compromisos políticos con el Gobierno ni con el EZLN, asegura que la ley adoptada por el Congreso es “mucho más clara y sensata que el texto de la Cocopa”. Y es que el Gobierno había firmado los Acuerdos de San Andrés en 1996 para ganar tiempo y sin la más mínima intención de incorporarlos a la Constitución. El resultado: un texto cargado de imprecisiones y demagogia que no satisfizo a nadie. Los propios zapatistas se quejaban de lo poco que habían obtenido en la negociación, mientras algunos de sus asesores advertían que los Acuerdos tenían errores jurídicos que iban a paralizar su aplicación. Con semejante base, la COCOPA había hecho, según los constitucionalistas, “una chapuza”.

Los senadores encargados de redactar el nuevo dictamen tuvieron que adecuar, por ejemplo, la definición de la “libre determinación y autonomía” a los principios generales de la Constitución, para proteger los derechos de terceros no indígenas que viven en el mismo territorio. «El derecho de los pueblos indígenas a la libre determinación se ejercerá en un marco constitucional que asegure la unidad nacional», reza el nuevo Artículo 2° de la Carta Magna. Será responsabilidad de los 32 Estados de la Federación legislar sobre «el reconocimiento de los pueblos y comunidades indígenas», a partir de sus realidades específicas. La “problemática indígena” es sumamente heterogénea: en nada se parece la situación de los comuneros del Ajusco, en el Distrito Federal, a la de los tarahumaras de Chihuahua, o a la de los tzeltales de la Selva Lacandona.

En todo caso, y como paso previo, los Congresos estatales deberán pronunciarse sobre la ley indígena. Se necesita el apoyo de un mínimo de 17 Estados para integrar la a la Constitución. El proceso de discusión y votación podría durar varios meses.

En algunos aspectos, la ley indígena aprobada por el Congreso va más allá que los Acuerdos de San Andrés. Así, la reforma al Artículo 1° de la Constitución prohíbe «toda discriminación motivada por origen étnico o nacional, el género, la edad, las capacidades diferentes, la condición social, las condiciones de salud, la religión, las opiniones, las preferencias, el estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y las libertades de las personas».

El Artículo 2°, en su nueva redacción, es más específico en la definición de los beneficiarios de la ley, cuando dice que «la conciencia de su identidad indígena de-

berá ser criterio fundamental para determinar a quiénes se aplican las disposiciones sobre pueblos indígenas». Este mismo artículo corrige la confusa redacción de los Acuerdos de San Andrés sobre los usos y costumbres, que quedan ahora definidos como el derecho de los indígenas a «decidir sus formas internas de convivencia y organización social, económica, política y cultural, (aplicando) sus propios sistemas normativos en la regulación y solución de los conflictos internos, sujetándose a los principios generales de esta Constitución, respetando las garantías individuales, los derechos humanos y, de manera relevante, la dignidad e integridad de las mujeres».

La nueva ley no se limita a definir los derechos indígenas. Además, incorpora a la Constitución varios programas «para garantizar la vigencia de (estos) derechos (...) y el desarrollo integral de (los) pueblos y comunidades (indígenas)». Se trata de las asignaciones presupuestarias para «impulsar el desarrollo regional», la educación bilingüe y la creación de becas, la salud y la medicina tradicional, la construcción de vivienda, la adquisición de medios de comunicación, el derecho a ser asistido por un intérprete en los juicios y la posibilidad para los presos de purgar sus penas en «los centros penitenciarios más cercanos a su domicilio».

Los zapatistas y sus aliados querían que la nueva ley reconociera los “territorios indígenas” (sin más definición) y el “uso colectivo de los recursos naturales”. Sin embargo, los senadores de las tres principales formaciones políticas del país (PRI, PRD y el Partido de Acción Nacional, PAN, que ha llevado a Vicente Fox a la presidencia) coincidieron en que esta exigencia conllevaba el riesgo de “generar innumerables conflictos de carácter agrario”.

El 29 de abril, cuatro días después de la adopción de la Ley Indígena por el Congreso, llegaron dos cartas furibundas firmadas por el “Subcomandante Insurgente Marcos, desde las montañas del Sureste Mexicano”. «Si algún nombre merece esa reforma», decía la primera, «es el de Reconocimiento Constitucional de los Derechos y la Cultura de Latifundistas y Racistas. ¿Y qué tal el Fox aplaudiendo la burla legislativa? Claro, como que él la apadrinó». En la segunda carta, escrita por Marcos en nombre del Comité Clandestino Revolucionario Indígena, un ente ficticio creado por el EZLN, el tono es mucho más agresivo: «Con esta reforma, los legisladores federales y el Gobierno foxista cierran la puerta del diálogo y la paz, pues evitan resolver una de las causas que originaron el alzamiento zapatista; dan razón de ser a los diferentes grupos armados en México al invalidar un proceso de diálogo y negociación; eluden el compromiso histórico de saldar una cuenta que México arrastra en sus casi doscientos años de vida soberana e independiente, y pretende fraccionar el movimiento indígena nacional (...)».

La reacción virulenta del jefe zapatista sólo sorprendió a aquellos que creían que el diálogo civilizado había desplazado al discurso estridente y a la recurrente amenaza de las armas. Como señalaba Juan José Hinojosa, comentarista de la revista de izquierda Proceso, Marcos volvía a ser “el niño berrinchudo, amenazante, insolente

frente a quienes le niegan el regalo del juguete tercamente anhelado” y retornaba “al maniqueísmo infantil y caprichoso”.

El subcomandante ha comprobado en varias oportunidades que no le interesa lo más mínimo llegar a un acuerdo. El fin del conflicto le obligaría a reinsertarse en la vida civil y a quitarse la máscara, su principal capital político. Su discurso indigenista parece indicar que el ex alumno de los jesuitas de Tampico (norte de México) ha matizado su pensamiento marxista leninista ortodoxo, pero no por esto ha cambiado sus posturas intransigentes del todo o nada.

Además, el estrellato mundial ha contribuido a agravar ese rasgo y todo parece indicar que Marcos no quiere perder un estatus que le permite hablar de tú a tú con intelectuales y políticos europeos que copan los medios de comunicación en sus países respectivos y que han contribuido a falsear la información sobre Chiapas, los indígenas, México y sobre el propio jefe zapatista. Para el antropólogo mexicano Roger Bartra, esos intelectuales «están envenenando el imaginario colectivo europeo con una serie de visiones que contribuyen a la ceguera ante el otro». Y agrega: «Hay una actitud de aparente exaltación del salvaje no occidental, pero en realidad lo que hay es la invención de un salvaje artificial portador de nuevas luces revolucionarias. Este salvaje trae las claves de una nueva izquierda, pero los intérpretes son siempre extranjeros. Es un retroceso notable».

Por ello, intentaremos ahora reconstruir esta historia falseada, actualizando la información que recopilamos cuando escribimos el libro *Marcos, la genial impostura*.

Uno de los méritos de Marcos —su único éxito real— fue haber abierto la caja de Pandora al desenmascarar el discurso oficial del PRI, que había inventado una nación próspera, democrática y respetuosa con las poblaciones autóctonas. Poco a poco todas las máscaras han caído, salvo la del principal interesado. Enquistado en su feudo, el subcomandante se muestra incapaz de aceptar las transformaciones del país. Su fe ciega en la vieja estrategia leninista de agudizar las contradicciones sólo ha servido para estancar el conflicto. Y son las comunidades indígenas las que están pagando las consecuencias.

*El encapuchado más famoso del planeta sigue teniendo fieles seguidores en Europa, pero la opinión pública mexicana ya se ha cansado de su alarmismo, de su ausencia de propuestas y de su boicoteo permanente a la transición política. Desde el inicio del conflicto, los múltiples comités de solidaridad creados en Europa y América Latina han sido víctimas de un espejismo, lo que explica su incapacidad para entender cómo un levantamiento en nombre de una causa aparentemente justa se ha transformado poco a poco en un obstáculo en el camino de la paz y la democracia anheladas por los mexicanos. Los seguidores del nuevo “mesías” han aceptado como palabra del *Evangelio* la historia oficial zapatista, difundida en los medios y en Internet, que no se corresponde con la realidad vivida por sus protagonistas.*

Cuando, el 1 de enero de 1994, un grupo de indígenas se levantó en armas contra el todopoderoso Estado mexicano en un lugar llamado Chiapas, el mundo no salía de su asombro. ¿Una nueva guerrilla en América Latina a esas alturas del siglo? El contexto internacional no podía ser menos propicio. La caída del Muro de Berlín, en 1989, el derrumbe de la Unión Soviética y el fin de la Guerra Fría parecían haber enterrado el recurso a la lucha armada para cambiar un régimen político. A nivel regional, los conflictos internos centroamericanos daban paso a un proceso de transición democrática, cuyos hitos más importantes fueron la derrota electoral de la revolución sandinista en Nicaragua, en 1990, y la firma de la paz en El Salvador en 1992. Por esas fechas, también, Guatemala se hallaba en plenas negociaciones, que culminarían en 1996.

La nueva guerrilla surgía además en un país que había sido ejemplo de estabilidad política en el continente y que celebraba la entrada en vigor del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y Canadá. La aparición del Ejército Zapatista es sin duda espectacular. Más de 2.000 indígenas mal armados irrumpen de madrugada en cinco poblaciones, entre ellas la turística ciudad colonial de San Cristóbal de Las Casas. Al frente va un joven blanco escondido tras un pasamontañas y armado con una metralleta uzi. Se presenta como el “subcomandante Marcos”, y explica que el objetivo de la nueva revolución es la democracia y la justicia. Su imagen es cautivadora: con el poncho negro, la gorra estilo Mao, las cartucheras cruzadas en el pecho y la pipa, parece una fusión de Emiliano Zapata y el Che Guevara.

Los combates se prolongan doce días y terminan con el cese el fuego decretado por el presidente Carlos Salinas. No se conoce con certeza el número de muertos, pero extraoficialmente se habla de 600, en su mayoría indígenas. Una exótica rebelión en México era un bombazo informativo, pero además estaba encarnada por una sugestiva figura que subyuga a los medios de comunicación: el subcomandante es atractivo, culto, emplea un lenguaje urbano, recurre a citas literarias y a canciones de rock, tiene sentido del humor, cierta tendencia al coqueteo y talento literario.

En cuestión de días, la prensa del mundo entero proyecta a Marcos como un nuevo Robin Hood al servicio de los diez millones de indios mexicanos. ¡La versión más reciente del “hombre nuevo”, la quimera de los años sesenta, acababa de descubrirse en la Selva Lacandona! La izquierda europea, que andaba en busca de una nueva identidad, encuentra en los zapatistas la causa perdida: la defensa de un pueblo autóctono, que sirve además como aglutinante frente al neoliberalismo, el enemigo común. América Latina emerge otra vez como un continente imaginario, lleno de este-reotipos dramáticos: buenos salvajes, guerrilleros redentores y pérfidos gobiernos. El cuadro fascina a unas sociedades agujoneadas por la mala conciencia de su pasado colonialista.

La Realidad, la pequeña aldea de la Selva Lacandona donde Marcos instala su cuartel general, se convierte en el nuevo santuario de la utopía y en añorado destino para el turismo revolucionario. Hasta allí acuden, en peregrinación, internacio-

nalistas de todo el mundo y algunas celebridades, como Alain Touraine, Régis Debray, Danielle Mitterrand y Oliver Stone. Cegados por las dotes escenográficas de Marcos, no llegan a enterarse verdaderamente de lo que está pasando. Están convencidos a priori de que todos los indígenas chiapanecos, cerca de un millón de personas, son zapatistas. Ignoran que la inmensa mayoría vive fuera de la zona de conflicto y está al margen de los acontecimientos, cuando no en contra del EZLN. Ignoran también que casi la mitad de los 65.000 habitantes de la Selva Lacandona han abandonado sus hogares a raíz del levantamiento armado. Ignoran, en fin, que el paraíso democrático de Marcos no existe, y que las comunidades están sometidas a una férrea estructura militarista. Poco a poco va imponiéndose lo que el historiador Juan Pedro Viqueira denomina el “Chiapas imaginario”.

Cuando comienza el conflicto, Chiapas era, para la gran mayoría de los reporteros y los enviados especiales, un misterio. A lo largo del primer año, las fuentes de información se reducían a tres: el subcomandante Marcos, las autoridades mexicanas y la diócesis de San Cristóbal de Las Casas, encabezada por el obispo Samuel Ruiz, un ferviente seguidor de la teología de la liberación. Todos ellos jugaban con el desconocimiento generalizado para manejar la información a su antojo.

El Gobierno, que nunca se preocupó realmente de los indígenas, salvo para comprarles su voto, aseguraba que se trataba de un levantamiento orquestado por oscuras fuerzas extranjeras. Marcos presentaba al EZLN como un movimiento de raíces étnicas, dirigido por un misterioso Comité Clandestino Revolucionario Indígena (CCRI) y apoyado de forma unánime por las comunidades de la Selva Lacandona, cuyo acceso estaba vedado a la prensa. El obispo, afanado en construir una iglesia autóctona desde los años sesenta, aseguraba que no sabía nada de lo que ocurría. Todos mentían, como se pudo comprobar más adelante, a medida en que la información oculta fue saliendo a la luz.

En 1995, después de un año de dar palos de ciego, el Gobierno desenmascara al subcomandante Marcos: se trata de un profesor de diseño gráfico llamado Rafael Guillén, nacido en 1957 en la ciudad norteña de Tampico. La detención de varios dirigentes zapatistas, que serían liberados meses después, aporta nuevas pistas.

Los antecedentes del EZLN no llevan a ninguna organización indígena, sino a las Fuerzas de Liberación Nacional (FLN), un grupo armado nacido en 1969 en Monterrey, la capital industrial del norte del país. Este puñado de estudiantes universitarios, admiradores incondicionales de la Revolución cubana, se había propuesto instaurar una “república democrática socialista” en México. En 1972 habían implantado su primer foco de guerrilla en la selva de Chiapas, que eligieron por su difícil accesibilidad y su proximidad a la frontera con Guatemala. Dos años más tarde, sin embargo, el Ejército los descubrió y mató a casi todos sus dirigentes.

Dos de los sobrevivientes, Fernando Yáñez (comandante Germán), recientemente promovido a “representante de Marcos” en las negociaciones con el Congreso, y Glo-

ria Benavides (comandante Elisa), reconstruyeron pacientemente el movimiento y, a principios de los ochenta, regresaron a Chiapas para relanzar el viejo proyecto de la organización armada. Pero esta vez iban a preparar mejor el terreno. Para ello se acercaron a la diócesis de San Cristóbal y trabaron amistad con Jorge Santiago, uno de los protegidos del obispo Samuel Ruiz.

Eran los años calientes de Centroamérica. El obispo y sus colaboradores estaban fascinados con la revolución de Nicaragua y la “iglesia popular” sandinista. En marzo de 1980, el asesinato del arzobispo de San Salvador, Óscar Arnulfo Romero, a manos de la extrema derecha, había contribuido a radicalizar a los integrantes de la diócesis. Muchos creían que el proceso revolucionario era irreversible, y que pronto alcanzaría a Chiapas. Los viejos guerrilleros de las Fuerzas de Liberación Nacional querían prepararse para el “gran día”, y para eso necesitaban la ayuda, o al menos la aquiescencia, del único poder social real que existía en las regiones indígenas de Chiapas: la diócesis y su inmensa red de catequistas. El 17 de noviembre de 1983, Germán y Elisa instalan, en la laguna Miramar, el primer campamento guerrillero de su “foco chiapaneco”, que llamaron Ejército Zapatista.

Seis meses más tarde, Rafael Guillén abandona sus clases en la Universidad Autónoma Metropolitana y se reúne con sus camaradas en la selva. Allí, bajo el nombre de Marcos, hace realidad su sueño de juventud: reencarnar a Ernesto Che Guevara, al que imitaba en todos sus detalles: la boina, la pipa, los dos relojes, el hacerse pasar por médico, el desarrollo de un asma tardío... Marcos era brillante y decidido. Tanto, que fue desplazando a los otros mandos (todos blancos y norteños) para quedarse con el control de la “tropa”, totalmente indígena. Los guerrilleros encontraron una población unida y concienciada, que luchaba desde hacía años por mejorar sus condiciones de vida. El Estado brillaba por su ausencia y la Iglesia había construido una especie de república autárquica cimentada sobre la catequesis del Éxodo, que establecía un paralelismo entre el pueblo judío que huyó de Egipto y los indígenas sin tierras que habían sido enviados a colonizar la Selva Lacandona.

Como nos explicaron varios sacerdotes que trabajaban entonces en esa diócesis, las comunidades vieron en los jóvenes recién llegados la vía para atraer la atención del Gobierno, para obligarlo a atender sus viejas demandas: necesitaban escuelas, clínicas, carreteras, precios justos para sus productos (ganado, maíz y café) y los títulos de propiedad para sus tierras. Los revolucionarios estaban dispuestos a ayudar, pero con otro objetivo. «Las comunidades veían la lucha armada como su autodefensa», nos contaba la comandante Elisa. «Para nosotros era un medio para la transformación política».

Ese fue el comienzo de un terrible malentendido entre los reformistas indígenas y los revolucionarios blancos. Un malentendido que explica por qué los indígenas pusieron los muertos los primeros días de enero de 1994, mientras Marcos se las ingenió para aparecer como el nuevo líder de la izquierda internacional.

Poco a poco los campamentos zapatistas crecen. Las comunidades venden su ganado y utilizan los créditos agrícolas para comprar armas, que Marcos les proporciona a un precio tres veces mayor que el del mercado: de esta forma, las FLN financian a sus cuadros urbanos. Para 1988, el EZLN controla la práctica totalidad de la región. Sin embargo, la estructura verticalista y el autoritarismo de los milicianos empiezan a causar fricciones con la población. Los disidentes son castigados y expulsados de las comunidades. Las aldeas más pobres se resienten de las cargas que genera su apoyo a la guerrilla. Y el contexto internacional pone en entredicho la viabilidad de la revolución como motor de cambio.

El obispo Samuel Ruiz se siente utilizado por Marcos. La guerrilla había penetrado su base social y la había encauzado hacia un objetivo que ahora le parecía suicida. A partir de 1989, la diócesis inicia una contraofensiva para convencer a las comunidades de que abandonen esa «organización maldita que preconiza la guerra y la muerte», como definía el obispo al EZLN. Pero ya era demasiado tarde. Como el aprendiz de brujo, don Samuel había ayudado a crear un monstruo que ya no podía parar. «Marcos nos dijo que iba a ser una guerra nacional, de obreros y maestros, y que íbamos a tumbar al Gobierno», recordaba un combatiente. «Y al final sólo nos levantamos nosotros, y fuimos nosotros quienes pusimos los muertos».

Siete años después del levantamiento, la situación de las comunidades tzeltales de la Selva Lacandona se ha deteriorado desde todos los puntos de vista. El conflicto ha roto el tejido social y ha creado divisiones. La mitad de la población ha debido abandonar sus hogares. La movilización política permanente, alimentada por el temor a una nueva intervención militar, ha reducido la actividad agrícola. Comunidades que antes eran autosuficientes dependen de la solidaridad nacional e internacional para conseguir incluso artículos de primera necesidad, como el maíz y el frijol.

Las puestas en escena de Marcos ocultaron la realidad silenciosa del “paraíso zapatista”, que dista mucho del falansterio idílico descrito por el subcomandante. Los “comisarios políticos” del EZLN impusieron el terror en las zonas que controlaban, expulsando a los recalcitrantes, a los “traidores” y a los indiscretos, confiscándoles sus bienes o condenándolos a trabajos forzados, como queda patente en las desgarradoras actas de denuncia que decenas de comunidades han enviado desde 1994 a la diócesis de San Cristóbal.

La violencia ha desbordado los márgenes de la zona de conflicto y ha alcanzado a las comunidades choles y tzotziles de los Altos y el Norte, donde las diferencias políticas y religiosas se resuelven con fusil y machete. La matanza de 45 personas, en su mayoría mujeres y niños, en la comunidad prozapatista de Acteal, el 22 de diciembre de 1997, conmovió a la opinión pública internacional. Más de un millar de indígenas han sido asesinados desde el alto el fuego del 12 de enero de 1994. Chiapas se ha convertido desde entonces en un campo de batalla donde se enfrentan zapatistas y simpatizantes del PRI, católicos y evangélicos, indios y mestizos... La paz, al final, ha resultado más sangrienta que la guerra.

En el terreno político, tampoco el levantamiento ha generado ventajas para la población indígena. Y es que la causa étnica nunca fue la prioridad de Marcos, ni la del resto de los dirigentes blancos de las Fuerzas de Liberación Nacional. Los estatutos de la organización, aprobados en 1993, siguen hablando de la “dictadura del proletariado”, del “internacionalismo revolucionario” y de “las tesis siempre válidas del marxismo-leninismo”. Los revoloteos líricos de Marcos han hecho olvidar que, durante la rebelión del 1 de enero, el EZLN pegó en las paredes de San Cristóbal las famosas “leyes revolucionarias”, unos decretos espeluznantes que llevarían a la instauración de sóviets en México.

Por eso el subcomandante rechazó, después de haberlos alabado, los primeros acuerdos suscritos en marzo de 1994 con el Gobierno, que había aceptado las 34 demandas recogidas en las comunidades indígenas. Y mientras el carismático líder zapatista se erigía en portavoz de la lucha planetaria contra el neoliberalismo y la globalización, el obispo de San Cristóbal, Samuel Ruiz, y una pléthora de antropólogos necesitados de reconocimiento tomaron el control del diálogo y lo llevaron al terreno inexplorado de una “autonomía indígena” con tintes redentoristas.

Los Acuerdos de San Andrés sobre “derechos y cultura indígenas”, firmados en febrero de 1996, eran mucho menos ventajosos para las comunidades autóctonas que aquellos planteados en 1994. Cuando se levantaron en armas, los pobladores de la Selva Lacandona exigían los mismos derechos y oportunidades que el resto de los mexicanos, es decir, que se aplicara la Constitución. Ahora son rehenes de un intenso juego retórico “usocostumbrista” que, como han señalado destacados estudiosos, puede acabar provocando una nueva forma de marginación (las “reservas indias”) y disfrazando el problema de fondo: la necesidad de crear condiciones de desarrollo socioeconómico que permitan a las poblaciones autóctonas salir de su postración e incorporarse a la nación mexicana en igualdad de condiciones.

Como contrapartida, las comunidades de la zona de conflicto se han visto marginadas del proceso de transición que vive el resto del país. Marcos ha boicoteado con las armas todos los comicios celebrados desde 1994 y ha impedido el arraigo, en su zona, de la oposición democrática (el PRD), que venía creciendo de forma exponencial. Las trabas al normal juego político han fortalecido los cacicazgos indígenas y han alimentado nuevos brotes de violencia.

El Gobierno, entre tanto, empezó a destinar cuantiosos recursos a Chiapas, pero siempre siguiendo patrones asistenciales. El presidente Fox se ha propuesto romper con esta tónica, y ha anunciado distintos proyectos (desde el Plan Puebla-Panamá hasta programas de microcréditos y desarrollo de la industria agroalimentaria) que han sido recibidos con burlas por parte del jefe zapatista.

En medio de los vientos de cambio político que soplan en el país, la figura del subcomandante resulta cada vez más fuera de la realidad. La izquierda democrá-

tica siempre ha desconfiado de él y no parece demasiado dispuesta a facilitar su reconversión. Y menos ahora que, por la vía electoral, ha logrado importantes triunfos, como la alcaldía de la Ciudad de México. La sociedad civil, a la que él ha invitado tantas veces a organizarse, no ha respondido a sus convocatorias, y el Movimiento de Liberación Nacional y el Frente Zapatista de Liberación Nacional han sido confiscados, y enterrados, por grupúsculos sectarios. El obispo Samuel Ruiz, principal valedor de Marcos, pero también su más fiero competidor, se jubiló en enero de 2000.

Algunos jóvenes indígenas formados en las “escuelas de cuadros” de la guerrilla han abandonado ya la organización. Decenas de comunidades que fueron bastiones zapatistas se han salido del movimiento armado. En cuanto a los más cercanos colaboradores de Marcos –Moisés, Tacho, David y algunos otros–, su compromiso con la causa durará en tanto que puedan mantener la esperanza de una negociación favorable para sus respectivas comunidades. Su propio futuro político depende de ello. “Los indios dejan que sus asesores blancos decidan, y les dejan hacer en tanto que eso da resultados”, explica el historiador Juan Pedro Viqueira, que ha vivido muchos años en San Cristóbal. “El día en que les dejan de funcionar, los mandan a volar. Y eso es lo que puede pasar con Marcos”.

Pero el subcomandante no parece dispuesto a cejar en su empeño: quiere mantener el conflicto de Chiapas en el epicentro de la política mexicana, porque es la vía, además, de alimentar el mito que él ha creado, y del que es prisionero.

Marcos ha cambiado las reglas de la lucha armada, que ha ido transformando poco a poco en espectáculo. Cuando habla de buscar la vía para construir «un mundo que incluya todos los mundos», precisa: «Si ese camino no existe, pues al menos nos divertimos bastante cuando tratamos de encontrarlo y no estamos matando a nadie, como no sea de aburrimiento». ¿Los indígenas del EZLN murieron entonces porque no comprendieron que se trataba de un juego? Con esta clase de comentarios, Marcos confirma lo que se sospechaba desde hace tiempo: su inmenso talento para el teatro no hace de él un dirigente político responsable, por más que él lo diga. ●